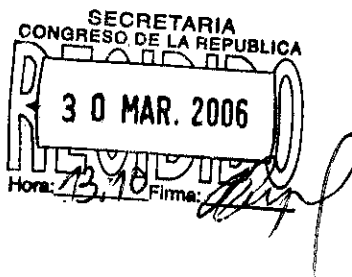




*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales*

*Congreso de la República
Guatemala, C. A.*



30 de Marzo de 2006

*Licenciada
Ana Isabel Antillón
Directora
Dirección Legislativa
Congreso de la República
Su Despacho*

Respetable Licenciada:

*Respetuosamente me dirijo a usted y al tenor de lo regulado en los artículos 39, 40 y 41 del Decreto 63-94 del Congreso de la República, me permito adjuntarle el **DICTAMEN FAVORABLE CON MODIFICACIONES** emitido por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, a los treinta días del mes de marzo del año en curso, a la Iniciativa de Ley que dispone Aprobar la Ley Reguladora del Recurso de Gracia, que se identifica en Dirección Legislativa con el No. de Registro 3204.*

Sin otro particular y para los efectos Jurídicos pendientes se remite el Dictamen Conjunto de mérito.

Atentamente,

Eduardo Zachrisson Castillo

Presidente

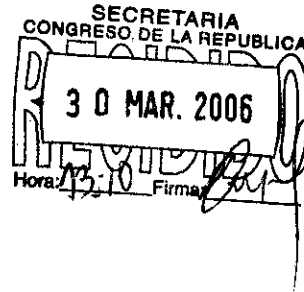
Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales



COMISION DE LEGISLACION
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES
Congreso de la República de Guatemala, C. A.



*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.*



DICTAMEN FAVORABLE CON MODIFICACIONES

A LA INICIATIVA DE LEY No. 3204 QUE DISPONE APROBAR LA LEY REGULADORA DEL RECURSO DE GRACIA

HONORABLE PLENO

Con fecha veinticuatro de febrero del dos mil cinco, el Honorable Pleno del Congreso de la República conoció y remitió a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley identificada con el número de registro 3204, presentada por el Diputado Otto René Cabrera Westerheyde, que dispone Aprobar la Ley Reguladora del Recurso de Gracia.

I. FINALIDAD DE LA INICIATIVA

La iniciativa en mención propone aprobar la Ley Reguladora del Recurso de Gracia.

II. ANÁLISIS DE LA INICIATIVA

Del estudio y análisis de la iniciativa se tomó en cuenta las siguientes consideraciones:

1. En la actualidad hay más de treinta personas condenadas a la pena de muerte.
2. La Convención americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) establece en su artículo 4, literal 6 establece "Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente".

**INICIATIVA 3204
DICTAMEN FAVORABLE CON MODIFICACIONES**



*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales*

*Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

3. La Convención americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) es parte de del sistema jurídico vigente, por lo que no se puede ejecutar la pena de muerte mientras no se regule la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, especialmente lo concerniente a la persona que la debe otorgar y del procedimiento del mismo.
4. Que se debe crear una Comisión Adjunta a la Procuraduría de los Derechos Humanos, la cual será la responsable de otorgar o denegar el Recurso de Gracia.
5. Que es urgente legislar para llenar el vacío jurídico existente.

**III. DICTAMEN DE LA COMISION
(CONSIDERACIONES FINALES):**

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, emite el siguiente **DICTAMEN FAVORABLE CON MODIFICACIONES**, a la Iniciativa de Ley identificada con el número 3204, presentada por el Diputado Otto René Cabrera Westerheyde, trasladando al Honorable Pleno el presente Dictamen adjuntando las modificaciones que las Comisiones estimaron pertinentes y el respectivo Proyecto de Decreto para que sea el Honorable Pleno del Congreso de la República, quien decida sobre su aprobación. La comisión hace suyas las enmiendas efectuadas a la iniciativa original.

Dado en la Sala de Sesiones de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, a los _____ días del mes de marzo del dos mil seis.

**INTEGRANTES
DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES**

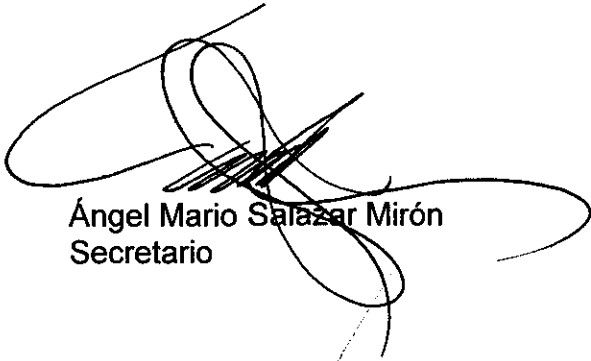
Eduardo Zachrisson Castillo
Presidente

Carlos Enrique Bautista Godínez
Vicepresidente

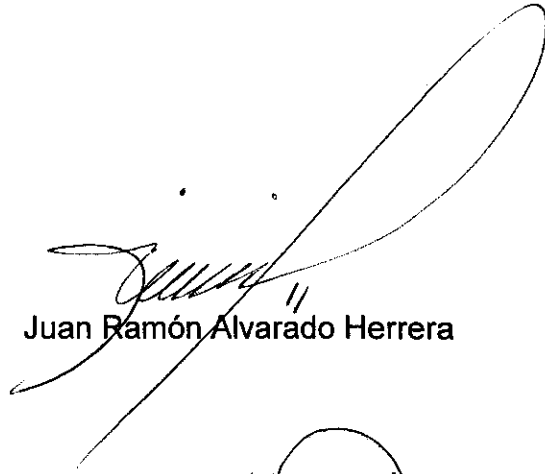
INICIATIVA 3204
DICTAMEN FAVORABLE CON MODIFICACIONES



*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

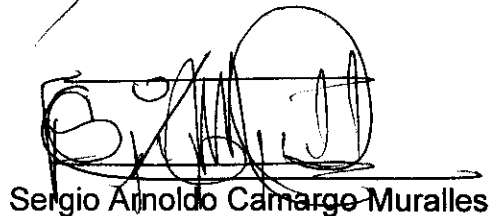


Ángel Mario Salazar Mirón
Secretario



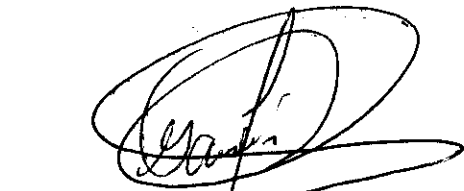
Juan Ramón Alvarado Herrera

Antonio Arenales Forno



Sergio Arnoldo Camargo Muralles

Otto René Cabrera Westerheyde

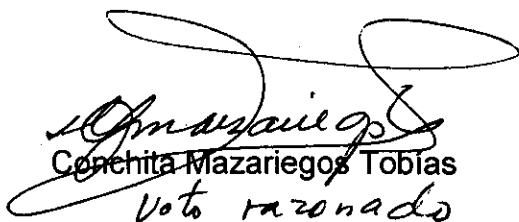


Gladys Anabella De León Ruiz

*Voto razonado
en contra.
en hoja adicional*

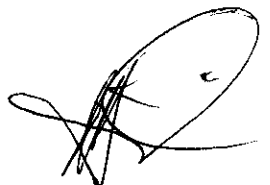
Marco Vinicio Cerezo Arévalo

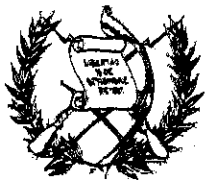
Voto Razonado en contra



Conchita Mazariegos Tobías

Voto razonado





*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

José Conrado García Hidalgo

Gabriel Heredia Castro

Carlos Humberto Hernández Rubio

Noe Alberto Orellana Callejas

Hugo Haroldo Hun Ponce

VOTO RAZONADO EN CONTRA

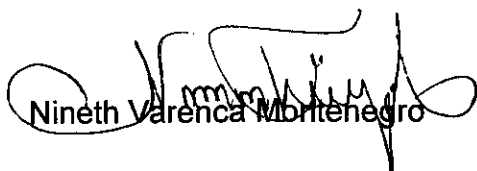
Pablo Manuel Duarte Sáenz Tejada

Voto Razonado en Contra

Mauricio Nohé León Corado



*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.*


Nineth Varenca Montenegro


Jorge Luis Ortega


Carlos Alberto Solórzano Rivera



VOTO RAZONADO DISIDENTE

Señor Diputado Presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, Licenciado Eduardo Zachrisson Castillo:

Con todo respeto aludimos a la iniciativa de ley No. 3204 denominada LEY REGULADORA DEL RECURSO DE GRACIA, impulsada por el Diputado OTTO RENE CABRERA WESTERHEYDE, sobre la cual la COMISIÓN por usted presidida emite dictamen favorable y propone el proyecto de ley que habrá de someterse a conocimiento del PLENO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA para su aprobación.

Como integrantes de la COMISIÓN verdaderamente sentimos no compartir los criterios exteriorizados en el dictamen, y obviamente, el proyecto de ley, y por ello no concurrimos con nuestro VOTO para su aprobación en Comisión, por las siguientes razones:

1. Las mínimas y casi inexistentes justificaciones, no tienen más elementos de juicio que: la simple mención de que existen más de 30 individuos condenados a la pena de muerte, cuyas sentencias están pendientes de ejecución; la mera transcripción errónea en la cita del artículo 4 numeral 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), sin interpretación y aplicación debida; la insulsa creación de una comisión adjunta a la "Procuraduría de los Derechos Humanos" (La Constitución: artículos 273, 274 y 275 y el Decreto No. 54-86 del Congreso de la República, Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos, no menciona para nada la institución "Procuraduría de los Derechos Humanos" como dice el análisis y el texto de la propuesta de ley); y la urgencia de llenar un vacío jurídico.
2. No vamos a detenernos más de lo necesario en el examen de dichas motivaciones. Independientemente de la cantidad alarmante de sentencias condenatorias a la pena de muerte y de las causas que han generado estas decisiones y de las muchas otras que están pendientes, debido a la tétrica y fría aplicación de la ley que reclama una sociedad aterrorizada por la odiosidad y proliferación de delitos, nos vemos en la necesidad de votar en contra del análisis y proyecto de ley propuesto, por los siguientes motivos específicos:

2.1 El artículo 4 inciso 6 del Pacto de San José, que es parte del ordenamiento jurídico superior del Estado de Guatemala conforme el artículo 46 de la Constitución, contempla por un lado, el derecho inalienable de todo condenado a la infamante y degradante pena de muerte, de pedir amnistía, indulto o conmutación de la pena, beneficios que podrán ser otorgados en todos casos, entendiendo que este último, precisamente el de conmutación de la pena por la inmediata inferior, que se ha conocido en el orden jurídico histórico del país, como el derecho al llamado "RECURSO DE GRACIA", que durante mucho

Handwritten signature and initials in the right margin.

tiempo estuvo institucionalizado procesalmente, corriendo parejas con abundantes tendencias doctrinarias universalizadas recogidas por numerosas legislaciones penales extranjeras, constitucionales y ordinarias, y que fuera excluido en un principio de nuestra legislación por una mala decisión jurídica, política y social de la legislatura anterior; y por el otro lado, postula que: "...No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente.", lo que nos alienta a pensar, que cuando el Congreso de la República asumió la responsabilidad de derogar la ley que regulaba el procedimiento para solicitar, conocer y resolver el RECURSO DE GRACIA ante la avalancha de sentencias condenatorias a la pena capital, estando vigente el derecho del reo a poder utilizar esa defensa eventualmente salvadora de su vida por ese Pacto de San José y otros convenios sobre derechos humanos que por mandato constitucional son parte de nuestra legislación interna, cometió un grave error jurídico, político y social al suprimir el procedimiento y la autoridad competente para conocer y resolver dicho recurso, violando obviamente la normativa internacional vigente en el país sobre la materia, favoreciendo en un sentido la prolongación indefinida de la vida de los condenados a muerte, y en otro sentido, afectándolos inmisericordemente con la indefinición de la pena de prisión, que mientras no se ejecuten las sentencias capitales, se han traducido en prisión a cadena perpetua, con las graves consecuencias que ya se han hecho sentir en el sistema penitenciario del país, por lo que un nuevo error jurídico, político y social, no puede salvar el cometido por la anterior legislatura.

2.2. La creación adjunta a la denominada "Procuraduría de los Derechos Humanos", cuya necesidad, naturaleza y alcances no se explican en forma alguna, a nuestro juicio es incompatible con las funciones humanitarias que la Constitución y la Ley de la materia atribuyen al Procurador de los Derechos Humanos y por supuesto a la Comisión Constitucional de Derechos Humanos del Congreso de la República, de tal manera que esa comisión no tiene cabida en el régimen de Constitucionalidad y de Legalidad del Estado de Derecho.

2.3 El vacío jurídico creado por el propio Congreso de la República, no puede ser llenado con una nueva ley como la propuesta.

3. Se suma a lo anterior el hecho que, al legislar impensadamente con entera abstracción de la técnica y sistemática legislativa, y con la finalidad de endurecer el sistema de penas ante la gravedad de los hechos antisociales sin ningún estudio y conocimiento de causas, el Congreso de la República en lugar de adicionar cuidadosamente las disposiciones del Código Penal que ya establecían la pena de muerte, con la finalidad de agravar las penas de prisión, reformó totalmente los artículos respectivos, y en algunos casos creo nuevas figuras delictivas para las que instituyó la pena de muerte, violando el artículo 4 inciso 2 del Pacto de San José. Tales son los casos de los artículos 131, 132 Bis párrafo final, 175, 200, 201 Bis, 201 Ter, reformados totalmente o creados como nuevos (artículos 4, 5 y 6 del Decreto 20-96 del Congreso de la República; 1 y 2 del Decreto 48-95 del

Handwritten signature and initials in the right margin, likely belonging to the author or a reviewer of the document.

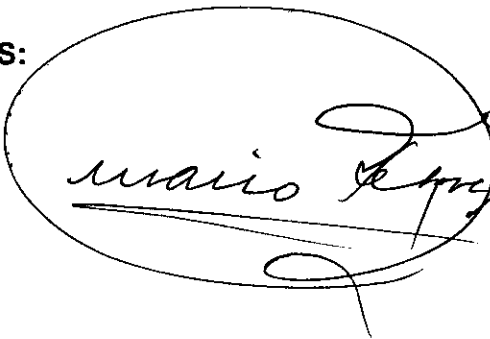
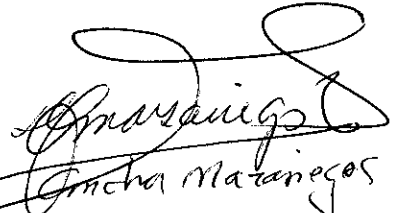

Congreso de la República 1 de los Decretos 38-94, 14-95, y 81-96 del Congreso de la República; y 1 del Decreto 33-96 del Congreso de la República). Si estas normativas violan el Pacto de San José en cuanto a la reforma total o por adición como se ha anotado en relación a la pena de muerte, son obviamente inconstitucionales las reformas por sustitución o adición que postulan esta pena conforme a los artículos 46, 175 párrafo inicial y 204 de la Constitución, por lo que el dictamen y proyecto de ley de la Comisión no tiene asidero en el Estado de Derecho que debe gobernarnos.

4. Finalmente, no puede pasar desapercibido, que nuestra Constitución alude a la pena de muerte, pero no para establecerla, ni para reforzar las garantías procesales para imponerla que es a lo que han tendido las reformas penales mencionadas, siendo más bien abolicionista (artículo 18); y de hecho, esas nuevas regulaciones, ya la han abolido al violar el artículo 4 inciso 2 del Pacto de San José, que a la letra dice: "Artículo 4. Derecho a la Vida... 2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente...", de donde la ley propuesta, la consideramos innecesaria y falta de sustentación.

Por todas esas razones absoluta y jurídicamente respaldadas a nuestro juicio, votamos en contra del Dictamen y Proyecto de ley de que hemos hecho mérito; y solicitamos al Señor Presidente de la Comisión se haga constar como parte la decisión de la Comisión.

Guatemala, 30 de marzo de 2006

DIPUTADOS:



*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

**DECRETO NUMERO _____
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA**

CONSIDERANDO

Que es necesario consolidar el Estado de Derecho y fundamentar el proceso democrático de Guatemala, siendo necesario para ello que la justicia se imparta de conformidad con la Constitución y las leyes de la República.

CONSIDERANDO

Que la Gracia es un derecho fundamental que asiste al condenado con pena de muerte, para solicitar la conmuta de dicha pena por la inmediata inferior; reconocido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual ha sido ratificada por Guatemala, de conformidad con el Decreto 6-78 del Congreso de la República.

CONSIDERANDO

Que careciendo nuestro ordenamiento legal de disposiciones pertinentes que rijan el ejercicio del Recurso de Gracia, y de la autoridad competente para otorgarlo, es imperativo emitir las mismas adecuándolas a nuestra ley fundamental.

POR TANTO:

En ejercicio de las atribuciones que le asigna el artículo 171, inciso a) de la Constitución Política de la República.

**INICIATIVA 3204
DICTAMEN FAVORABLE CON MODIFICACIONES**



*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

DECRETA

La siguiente:

**LEY REGULADORA DE LA TRAMITACIÓN Y OTORGAMIENTO DEL
RECURSO DE GRACIA**

Artículo 1. Autoridad Competente. La autoridad competente para conocer y resolver el otorgamiento del Recurso de Gracia, será la comisión que adjunta a la Procuraduría de los Derechos Humanos, se forme cuando se haga la solicitud respectiva.

Artículo 2. Integración de la Comisión. La Comisión deberá integrarse así: a) El Procurador de los Derechos Humanos, quien la presidirá; b) Un Magistrado electo por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia; c) El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República; d) Un representante del Organismo Ejecutivo, electo en Consejo de Ministros; y, e) Un representante de los Rectores de las Universidades del país.

Artículo 3. Legitimación. La solicitud para el otorgamiento del Recurso de Gracia, puede ser presentada por el condenado, su Abogado defensor y por las Organizaciones o Asociaciones existentes, que gocen de personalidad jurídica, cuyo objeto sea la defensa de los Derechos Humanos.

Artículo 4. Requisitos. Con la solicitud se adjuntará informe del Director del Penal donde guarde prisión el condenado, o en su defecto de oficio, sobre la conducta observada por éste durante el tiempo de reclusión. La Comisión podrá requerir los informes que estime convenientes.

Artículo 5. Procedencia. La solicitud para la concesión del Recurso de Gracia, únicamente procederá cuando haya recaído sentencia firme.

Artículo 6. Trámite. La solicitud será presentada ante el Juzgado de Ejecución Penal que conozca, dentro de los quince días siguientes de la notificación que deja firme la sentencia que imponga la pena de muerte.

INICIATIVA 3204
DICTAMEN FAVORABLE CON MODIFICACIONES



*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

El Juzgado de Ejecución Penal remitirá inmediatamente la solicitud recibida, a la Secretaría de la Procuraduría de los Derechos Humanos, junto con los antecedentes respectivos.

Artículo 7. Convocatoria. Una vez recibida la solicitud y los autos, la Secretaría los remitirá al Procurador de los Derechos Humanos, quien dentro de los tres días siguientes a la recepción, convocará a los Organismos del Estado y a las Instituciones mencionadas en el artículo segundo de esta Ley, para que en el plazo de ocho días, designen a sus representantes, debiendo quedar integrada la comisión a más tardar, cinco días después.

Artículo 8. Resolución. Una vez conformada la Comisión, se iniciará la deliberación correspondiente, debiendo resolver lo que procede dentro del plazo de quince días.

Artículo 9. Pasado el plazo establecido y la Comisión no hubiere emitido resolución alguna, se tendrá por resuelto en sentido negativo, por lo que se tendrá denegado el Recurso de Gracia, en cuyo caso no cabra recurso alguno.

Artículo 10. Notificación. Lo resuelto por la Comisión será notificado tres días después al condenado, a su Abogado Defensor, al Juzgado de Ejecución Penal, a la Fiscalía General del Ministerio Público, y en su caso, al querellante adhesivo que figuró en el expediente judicial que motivó la pena de muerte.

Cuando se otorgue el Recurso de Gracia, el Juzgado de Ejecución Penal estará a lo previsto por los artículos 493 y 494 del Código Procesal Penal, Decreto 51-92 del Congreso de la República.

En caso de que el Recurso de Gracia fuere denegado, se procederá conforme al Decreto 100-96 del Congreso de la República, Ley que Establece el Procedimiento para la Ejecución de la Pena de Muerte.

INICIATIVA 3204
DICTAMEN FAVORABLE CON MODIFICACIONES



*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

Artículo 11. Transitorio. Las solicitudes que para el otorgamiento del Recurso de Gracia se encuentren pendientes de resolver al entrar en vigor la presente ley, serán presentadas en el plazo de treinta días contados a partir de la vigencia de la misma, en el modo y forma prescritos en los artículos que preceden. La Comisión deberá resolver las solicitudes en un plazo máximo de seis meses contados a partir de su recepción.

Artículo 12. Reforma. Se reforma el artículo 2 de la Ley que establece el procedimiento para la ejecución de la pena de muerte, Decreto 100-96 del Congreso de la República el cual queda así:

Artículo 2. Pasado el plazo para interponer el recurso de gracia sin que se hubiere hecho uso de él o luego de notificarse al reo su denegatoria, el juez ejecutor señalara día y hora para el cumplimiento de la pena capital, notificándose dicha resolución a los sujetos procesales, debiendo ser la última notificación la correspondiente al reo.

Artículo 13. Derogatoria. Quedan derogadas todas aquellas disposiciones que se opongan a la presente ley.

Artículo 14. Vigencia. El presente decreto entrará en vigor 8 días después de su publicación en el Diario Oficial.

Pase al Organismo Ejecutivo para su publicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Organismo Legislativo. En la ciudad de Guatemala, a los dos días del mes de marzo del año dos mil seis.

INICIATIVA 3204
DICTAMEN FAVORABLE CON MODIFICACIONES